

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 119
O R D I N A R I A
LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del lunes doce de noviembre de de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número ciento dieciocho, ordinaria, celebrada el martes seis de noviembre de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el doce de noviembre de dos mil doce:

II. 1. 58/2011

Amparo en revisión 58/2011 promovido por ***** y otros, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación y aplicación del Decreto relativo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, particularmente su artículo 109, fracción III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en relación con los actos de aplicación del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, atribuidos al Director General y al Director de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , en contra del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, adicionada mediante decreto publicado el treinta de diciembre de ese mismo año, en términos del último considerando de esta ejecutoria”.*

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando décimo octavo, en cuanto se estudian los planteamientos en que se aduce un trato diferenciado injustificado entre pensionados y jubilados civiles (exención parcial), frente a militares retirados (exención total).

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que existen datos objetivos y razonables que justifican un trato diferenciado entre los supuestos comparados, considerando que los militares retirados tienen un estatus constitucional diferente, en tanto que la norma fundamental les asigna altas finalidades y funciones en beneficio del país, lo que justifica que tengan ciertos beneficios, derivados precisamente de las labores que desempeñan, indicando que, sin embargo, la motivación del legislador es insuficiente para justificar el trato desigual, pues lo sustenta en que la vida de los militares en retiro es precaria y que, en consecuencia, es preciso otorgarles prestaciones de acuerdo a los nuevos tiempos que vive el país, pues dichas razones podrían aplicarse a cualquier otro tipo de pensionados, máxime que existen algunos haberes de retiro de militares que no permiten calificar con este tipo de adjetivos a quienes los gozan.

Por ende, señaló que el quid del asunto consiste en determinar qué sucede cuando el legislador justifica de forma insuficiente el trato diferenciado, mientras que existan razones que evidencian con claridad que dicho trato sí se encuentra justificado, ante el cuestionamiento sobre si el juez constitucional puede valorar cuestiones distintas a las

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

que planteó el legislador o tendrá que ceñirse exclusivamente a la motivación que éste dio.

Al respecto, consideró que, en principio, el juez constitucional debe estarse a lo establecido en el proceso legislativo, de manera que si las argumentaciones manifestadas en éste no son suficientes para justificar el trato desigual, entonces deberá declararse la inconstitucionalidad del precepto que establece dicho tratamiento, pero cuando resulta evidente y notoria la diferencia entre los supuestos de hecho comparados, de forma que el trato desigual se encuentra justificado, el juez constitucional puede hacer un análisis de razonabilidad, con independencia que, desde el punto de vista formal, el legislador se haya quedado corto en cuanto a la justificación del trato diferenciado o cuando incluso haya argumentado cuestiones que no eran pertinentes, máxime tratándose de casos en que no se requieren elementos técnicos o científicos o de otra índole que no estén a disposición del juez constitucional, a fin de determinar la validez de la norma en análisis.

Para apoyar su criterio dio lectura a la tesis P./J. 36/2010, de rubro: “NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE”, indicando que si bien es cierto que ésta se refiere al tema de los fines extra fiscales, la

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

argumentación que contienen en cuanto a la motivación del acto legislativo resulta aplicable en el presente caso.

De esta forma, concluyó que en el caso no existe violación al principio de equidad tributaria, pues la decisión legislativa es correcta, en tanto que supera un test de razonabilidad.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no viola el principio de equidad tributaria. Después de hacer referencia a las anteriores leyes que rigieron los haberes de retiro de los militares, señaló que antes de analizar el problema de equidad tributaria debe determinarse si alguna de esas leyes ha sufrido una derogación a causa de una ley posterior, tomando en cuenta que la Ley de Impuesto sobre la Renta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, mientras que la anterior Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis.

En relación con lo anterior, precisó que las sucesivas reformas en ambas leyes citadas no trajeron como consecuencia la derogación de las disposiciones que pudieran estar en contrario a las que se emiten, por lo que concluyó que ambas leyes siguen subsistiendo en cuanto a la regulación de la figura de la que se ocupa el proyecto.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Señaló que de acuerdo con una tesis de la Suprema Corte de Justicia, la regla de la ley posterior que deroga la anterior sólo opera cuando las normas de que se trate caben dentro de la misma esfera de competencia, lo que no tiene incidencia en el caso concreto dado que para ambas legislaciones la esfera de competencia recae en el Congreso de la Unión. Señaló que, no obstante, resulta aplicable al caso la regla según la cual, tratándose de normas que estén ubicadas en la misma esfera de atribuciones, debe prevalecer la que tiene indiscutiblemente la índole especial, pues podría decirse que la ley general es la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto que establece de forma genérica cuáles son las pensiones que se encuentran gravadas por este impuesto, mientras que la ley especial sería la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Indicó que podría estimarse que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al referirse a todas las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, así como a todas las pensiones vitalicias que se establecen en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, no implica ningún problema de equidad tributaria. De esta forma, señaló que, tomando en cuenta que cuando esa disposición se refiere a “haberes de retiro” no se refiere de manera específica a los militares, dado que dicho haber puede otorgarse también a otro tipo de funcionarios, puede

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

considerarse que constituye un precepto genérico conforme al cual se determina cómo se gravarán dichos haberes de retiro, jubilaciones y pensiones, estableciendo la exención general en relación con el número de salarios mínimos respectivos.

Señaló que comparte el criterio de que existe una diferencia entre los diversos regímenes establecidos en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en donde se establece que los militares se regirán por sus propias leyes, de lo que se deduce que éstos obedecerán a un régimen especial, indicando que en éste se encuentran situaciones específicas como la disciplina, la obediencia, el honor pero, sobre todo, la disponibilidad que deben tener los militares respecto de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para regresar a las filas, aun estando en situación de retiro y en posibilidad de cobrar los haberes correspondientes. Señaló que esta situación especial, que no acontece tratándose de cualquier otro de los sujetos pensionados a que se refiere el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, resulta convincente para justificar el trato diferenciado.

Finalmente, señaló que votó en contra de la tesis citada por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, considerando que, con independencia de que el legislador haya determinado en la exposición de motivos las razones que sustentan el establecimiento de una exención, el juez constitucional tiene la obligación de analizar el problema de

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

equidad tributaria a fin de determinar si los sujetos que se comparan son o no iguales, dado que el hecho de que el legislador señale razones que normalmente han estado enfiladas a justificar fines extra fiscales, lo cierto es que la consecución de éstos no es un principio que se encuentre comprendido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza indicó que votaría por la constitucionalidad del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dado que no es éste sino el 32 de la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas el que crea categorías diferenciadas, el cual no fue impugnado, por lo que deben estimarse inoperantes los argumentos esgrimidos en contra del aquel artículo.

Sometida a votación la propuesta del considerando décimo octavo del proyecto, consistente en determinar que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, votaron en contra los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Ortiz Mayagotia y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz y Sánchez Cordero de García Villegas votaron a favor del proyecto y reservaron su derecho para formular voto particular.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Como resultado de esta votación el Tribunal Pleno acordó que la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas se haga cargo de realizar el engrose correspondiente al considerando décimo octavo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando séptimo, en cuanto se analizan los agravios relacionados con el principio de legalidad tributaria, en los que se aduce que las pensiones y jubilaciones no son objeto del impuesto sobre la renta.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que en su proyecto, con apoyo en distintos precedentes de este Alto Tribunal, se propone determinar que, contrariamente a lo afirmado por la quejosa recurrente, la cantidad que periódicamente obtiene por concepto de pensión o jubilación es un monto en efectivo que ingresa a su haber e incrementa su patrimonio en forma positiva, por lo que constituye un ingreso susceptible de ser gravado en términos de los artículos 1º y 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con independencia de que el diverso artículo 109, fracción III, reclamado, establezca una exclusión impositiva o excepción a la regla general del gravamen, que impide la producción total o parcial de los efectos derivados de la realización del hecho imponible, de manera que por los ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones, por un monto diario que exceda de nueve veces, en este caso, el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, se deberá pagar el tributo.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Por otra parte, indicó que en el proyecto se considera que no obstante lo fundado del agravio en el que se afirma que el juez de Distrito omitió pronunciarse respecto del concepto de violación en el cual se aduce que en términos del artículo 127, fracción IV de la Constitución Federal, las jubilaciones y pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, no forman parte de la remuneración, por lo que al no ser considerados como tal, consecuentemente, no son gravables, tal circunstancia no es obstáculo a la conclusión alcanzada, ya que ello no implica que se trate de conceptos no gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque si bien no serían considerados para determinar esa contribución conforme al Capítulo I, Título Cuarto de la ley que la regula, lo cierto es que dichos conceptos ,en tanto ingresos, quedarían comprendidos en el Capítulo IX, relativo a los demás ingresos que obtengan las personas físicas, motivo por el cual sí son objeto del impuesto y por ende se encuentran gravados.

Sometida a votación la propuesta del considerando séptimo del proyecto, consistente en establecer que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no infringe el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las pensiones y jubilaciones constituyen ingresos susceptibles de ser gravados por el impuesto sobre la renta, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando octavo, en cuanto se analizan los planteamientos en que se aduce que la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, en tanto que se contrapone al contenido normativo de las fracciones V y XXVIII, párrafo quinto, del mismo precepto.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que en su proyecto se propone determinar que si bien el *a quo* no analizó el argumento de fondo a que alude la recurrente, se concluye que no existe la antinomia que se aduce en la demanda de amparo, en virtud de que, en atención al principio de prelación o preferencia a favor de la norma específica, debe estimarse que la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta grava la específica prestación de seguridad social denominada jubilación o pensión, mientras que la fracción V de esa disposición prescribe que no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención del resto de las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Indicó que tampoco existe la antinomia que aduce la inconforme entre las fracciones III y XXVIII, párrafo quinto, del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en tanto esta última excluye como ingresos acumulables del trabajador las aportaciones a que hace referencia, ocurridas en el ejercicio en que se genera con la finalidad de que su vida laboral activa no constituyan un concepto gravable,

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

mientras que la diversa fracción III las considera, al ser conceptos integrantes de la respectiva pensión o jubilación, como ingreso gravado, hasta que dicho trabajador deja de serlo, y adquiere la calidad de pensionado o jubilado, señalando que lo anterior pone de manifiesto que las porciones normativas de referencia regulan situaciones distintas y establecen consecuencias jurídicas diversas, de manera de que no existe la contraposición normativa denunciada y, por ende, no se infringe la seguridad jurídica tutelada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, a través del principio de legalidad tributaria.

El señor Ministro Valls Hernández señaló que si bien concuerda con las consideraciones del proyecto, el análisis debe efectuarse exclusivamente a partir del principio de seguridad jurídica y no del de legalidad tributaria, pues en el caso no se examina si se previó en la ley alguno de los elementos del tributo, sino si existe contradicción entre las fracciones III y V del artículo 109 impugnado, que señala que no se pagará impuesto respecto a las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, y III y la diversa fracción XXVIII, párrafo quinto, del mismo numeral, que dispone que las aportaciones que efectúen los patrones y el gobierno federal a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de la cuenta individual que se constituye en términos de la Ley del Seguro social, entre otros casos, no serán ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio fiscal en el que se aporten o

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

generen según corresponda, por lo que deben eliminarse del proyecto aquellas consideraciones relativas al principio de legalidad tributaria.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que en el caso no existe un problema de constitucionalidad, sino una colisión de leyes que se resuelve mediante los métodos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido a efecto de resolver cuál debe prevalecer, por lo que si el considerando en análisis se mantiene como tal votaría en contra de lo que establece.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que no comparte el proyecto dado que parte de una supuesta antinomia para después señalar que no existe tal y que en todo caso no sería un problema de constitucionalidad sino de jerarquía de leyes. Estimó que no existe el problema de constitucionalidad que se plantea, indicando que no puede hablarse propiamente de una antinomia, de manera que el concepto de violación sería inoperante más que infundado.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas indicó que realizaría el engrose a fin de que se declarare inoperante el concepto de violación respectivo.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando octavo del proyecto, consistente en declarar inoperantes los planteamientos en los que se aduce que la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola los principios de legalidad tributaria y seguridad

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

jurídica al contraponerse al contenido de las fracciones V y XXVIII, párrafo quinto, del mismo precepto, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de la Larrea aclaró que su voto lo emite obligado por el criterio mayoritario en tanto que al votar a favor de la suplencia de la queja no podría estar a favor de la inoperancia, a lo que se adhirió la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando noveno, en cuanto se analizan los planteamientos en que se aduce que las pensiones y jubilaciones no son reveladoras de capacidad contributiva a luz del principio de proporcionalidad tributaria.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que su proyecto propone determinar que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respeta el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer la obligación de los contribuyentes que perciben ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones, de pagar el impuesto relativo sobre la cantidad cuyo monto diario exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, pues dicho supuesto recae sobre una auténtica y real manifestación de capacidad contributiva de los sujetos obligados, en tanto se grava el incremento positivo del patrimonio, sin que represente obstáculo a ello el hecho de que el ingreso gravado

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

provenza del pago de jubilaciones o pensiones, pues no hay disposición constitucional que impida establecer que el tributo sobre tales conceptos, aun cuando se encuentren regulados como prestaciones de seguridad social, en términos de la norma aplicable, ya que el tributo no recae sobre la totalidad del monto obtenido sino sobre una parte de éste.

Sometida a votación la propuesta del considerando noveno, consistente en determinar que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respeta el principio de proporcionalidad tributaria, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando décimo primero, en el que se analizan los planteamientos en que se aduce que el precepto reclamado provoca doble tributación y que, por ende, viola el principio de proporcionalidad tributaria, en la inteligencia de que el considerando décimo se eliminaría.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que en su proyecto, tomando en cuenta que la parte quejosa optó por el mecanismo denominado: “Régimen setenta y tres”, se atiende, entre otras disposiciones, a los artículos 176, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y siete, los cuales prevén las reservas técnicas que se integran por la aportación tripartita

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

de los patrones, de los trabajadores y del Estado, para, con base en ello, considerar que la naturaleza de los fondos depositados en las reservas técnicas es preventiva, porque su finalidad última es integrar un fondo que proteja los riesgos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los asegurados, quienes pueden disponer de dichos fondos cuando cumplan determinados requisitos legales, de forma que uno y otro concepto, el ingreso por salario, por un lado y el obtenido con cargo a la reserva técnica, por el otro, no pueden ser considerados como renta proveniente de la misma fuente, dado que el primero deriva exclusivamente del trabajo, mientras que en el segundo factoriza también el ahorro adicionado con las aportaciones tanto del patrón como del gobierno.

De este modo, señaló que en el proyecto se precisa que la aportación del patrón y del gobierno hacen evidente la discrepancia entre ambos conceptos, ya que denotan las diferencias cualitativas y no sólo cuantitativas entre un supuesto y otro, tomando en cuenta que no podría hablarse de una supuesta doble imposición parcial, apreciada en la parte que podría corresponder a la cuota del trabajador, sino que, por el contrario, una vez afectada tal cantidad al seguro de retiro, no debería seguir siendo vista como un salario, pues se integra a un concepto distinto propio de la seguridad social. En estos términos, indicó que en el proyecto, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, se precisa que del contenido de los preceptos legales analizados no se

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

desprende que la retención de las cuotas obrero-patronales, que fueron enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social, primero pagaron un impuesto derivado del ahorro y ahora lo estén pagando al retirarlo, para, en su caso, estar en presencia de un supuesto de doble tributación, el cual incluso no sería inconstitucional por sí mismo y, en tales condiciones, se estima que los argumentos analizados, resultan infundados.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó estar de acuerdo con el sentido de la propuesta, indicando que se apartaría de las consideraciones relativas al análisis del sistema de mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y siete, en tanto que se refieren a una ley derogada y no a la actual.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó no compartir la propuesta del proyecto, dado que parte de una especie de estudio oficioso, casi de suplencia de la queja, tomando en cuenta si los recurrentes no hicieron valer el argumento relativo a que el juzgador federal no analizó la legislación de seguridad social conocida como “régimen setenta y tres”, entonces no debería hacerse el análisis relativo, debiendo declararse inoperantes los agravios, en tanto que no contravienen las consideraciones en las que se sustentó el juez federal para desestimar el concepto de violación que se hizo valer, dado que mientras éste sostuvo que no se actualizaba una doble tributación porque no se trata de la misma fuente gravable, siendo en un caso el

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

salario y en el otro el ahorro, y porque las pensiones o jubilaciones son una fuente de riqueza que se integra, no únicamente con las aportaciones del trabajador, sino también con las que hace el Estado y el patrón, adicionada con los rendimientos generales en la cuenta, los agravios insisten en que sí se trata de la misma fuente de riqueza porque el salario del trabajador que pagó impuestos se convierte en parte de su ahorro.

El señor Ministro Presidente Silva Meza recordó que en el documento circulado por la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas, ante el resultado de la votación del tema de la suplencia de la deficiencia de la queja, se planteó eliminar los considerandos que se ocuparan de ella y se suprimieran de los demás los argumentos relacionados, indicando que el considerando décimo primero cae en este último supuesto.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas señaló que si el Tribunal Pleno decide declarar la inoperancia del agravio, obligada por el criterio mayoritario respecto de la suplencia de la queja, votaría también por la inoperancia, reservando su derecho para formular voto concurrente.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó que en el documento circulado por la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas, a raíz de la votación mayoritaria en el sentido de que no procedía suplir la deficiencia de la

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

queja, no se contempló la modificación al considerando décimo primero, por lo que se apartaría de sus consideraciones, estimando que aun cuando se elimine el tema de la suplencia de la deficiencia de la queja, el agravio debe declararse inoperante, dado que el planteamiento de que el Juez de Distrito no analizó la legislación aplicable a la opción del quejoso no se hizo valer en vía de agravio.

El señor Ministro Presidente precisó que la señora Ministra ponente Sánchez Cordero aceptó cambiar la propuesta a efecto de declarar inoperante el agravio respectivo.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que la impugnación respectiva es en el sentido de si la norma combatida provoca o no doble tributación, indicando que éste debe contestarse a partir de los argumentos que da la parte recurrente y no con el análisis del sistema, en tanto que ello nunca se adujo. De esta manera, señaló que si bien comulga en que no existe doble tributación, no está de acuerdo con los argumentos con los que se da respuesta al concepto de agravio.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó coincidir con la propuesta del señor Ministro Aguilar Morales de declarar inoperante el agravio, dado que la parte recurrente no impugnó de manera adecuada lo que argumentó el Juez de Distrito. Indicó que en el caso sí pudiera haberse determinado que existe un problema de

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

doble tributación, pero que no se está en posibilidad de tomar esta decisión dado que ello tendría que efectuarse vía suplencia de la deficiencia de la queja además de que la parte recurrente tampoco acredita la doble tributación.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que si bien podría coincidir con esos criterios, lo cierto es que el Juez de Distrito sí contesta el argumento respectivo en el sentido de que no existe doble tributación, porque no se está ante una misma fuente de riqueza.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando décimo primero consistente en declarar inoperantes los agravios relativos a que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta provoca doble tributación y que, por ende, viola el principio de proporcionalidad tributaria, se aprobó por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando décimo segundo, en cuanto se analizan los planteamientos en los que se aduce que la disposición combatida viola el principio de equidad tributaria, en tanto establece un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes en función del monto exento.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que su proyecto propone desestimar el argumento analizado, porque el parámetro seleccionado por el Legislador para fijar el límite de la exención contenida

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

en el precepto reclamado está justificado constitucionalmente, en la medida en que confiere un beneficio consistente en una exención generalizada para todas las personas que obtengan ingresos hasta por un monto diario de nueve veces el salario mínimo general por concepto de pensión, jubilación o haber de retiro, sin distinción alguna, de manera que quienes obtengan ingresos de este tipo, superiores al monto señalado, deberán cubrir el impuesto sobre la renta únicamente por el excedente.

En ese sentido, señaló que en el proyecto se precisa que el precepto cuestionado no hace una distinción entre contribuyentes que gozarán del beneficio y otros que no, y si bien de aquél pudiera derivarse una distinción, ésta no tiene el alcance de eliminar el beneficio sino únicamente de limitarlo, porque las personas que por los conceptos de que se trata obtengan una cantidad mayor al monto señalado, no dejan de gozar de dicha exención en la medida en que únicamente deben cubrir el gravamen por el excedente, agregándose que el parámetro seleccionado por el legislador para determinar el límite de la exención se configuró normativamente de manera razonable, porque, por una parte, está vinculado con el monto que se percibe, es decir, con la cuantía del ingreso, lo que implica que está estrechamente relacionado con el objeto del gravamen, y, por otra parte, porque respeta un umbral de ingresos que queda intocado y se acota el beneficio cuando el nivel de éstos supera a aquél, con lo que se satisface el postulado

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

relativo a que las exenciones deben reducirse al mínimo necesario.

Sometida a votación la propuesta del considerando décimo segundo del proyecto, consistente en declarar infundados los planteamientos en los que se aduce que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de equidad tributaria, en tanto establece un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes en función del monto exento, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que se eliminarían de los considerandos décimo tercero y décimo cuarto las consideraciones relacionadas con el control de la convencionalidad y el artículo 133 constitucional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando décimo quinto, en cuanto se analizan los agravios en que se aduce que el precepto reclamado viola el artículo 123, apartado A, fracciones VI, VIII y XXIX, y el apartado B, fracciones VI y XI, de la Constitución Federal.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que en esta parte el proyecto analiza el argumento en el que la quejosa recurrente aduce que dichas disposiciones fundamentales no autorizan reducción alguna tratándose de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, como sí lo hacen respecto del salario, por lo que el

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

precepto reclamado, al establecer el cobro del impuesto por el excedente al monto exento, resulta inconstitucional. Señaló que, para dar respuesta al anterior planteamiento, se desarrollan algunas consideraciones en torno al contexto tanto del precepto reclamado como de las disposiciones de la Constitución Federal que se estiman transgredidas, incluyendo algunos de sus antecedentes, para, con base en lo anterior, calificar de infundado el argumento analizado, porque no puede considerarse que al no señalar expresamente el artículo 123 constitucional que puedan realizarse descuentos a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, cuando lo establezca la ley, como se dispone respecto del salario, exista prohibición absoluta para hacer cualquier tipo de reducción a esas prestaciones de seguridad social, porque al tratarse de ingresos asimilables que tiene el mismo objeto, debe interpretarse que esas prestaciones gozan de las medidas de protección al salario que les resultan aplicables, de manera que no es posible considerar que por no referirse la disposición constitucional a las mencionadas prestaciones de seguridad social, respecto de éstas exista una medida de protección mayor, consistente en la imposibilidad de establecer legalmente cualquier reducción, inclusive de las que están autorizadas para el salario, ya que sólo respecto del salario mínimo existe prohibición absoluta.

Agregó que en el proyecto se establece que una interpretación en los términos pretendidos por la recurrente

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

implicaría desatender otras prestaciones constitucionales, concretamente la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por lo que se concluye que el precepto reclamado no viola el artículo 123 constitucional, en las porciones normativas destacadas, en virtud de que es inexacto que esa Norma Fundamental prohíba que se haga cualquier retención a pensiones y jubilaciones.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó que en el considerando décimo cuarto existe un argumento que se podría contestar brevemente, en el sentido de que la norma impugnada no se contrapone con lo establecido en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, porque del análisis de los preceptos de éste no se aprecia que el Estado Mexicano esté impedido para imponer contribuciones sobre las fuentes de riqueza consistentes en pensiones y jubilaciones y tampoco se advierte que haya renunciado a su potestad tributaria sobre ingresos de esa naturaleza.

El señor Ministro Pardo Rebolledo indicó que debe darse respuesta a los agravios de los que se ocupan los considerando décimo tercero y décimo cuarto, por más que la respuesta pudiera modificarse en términos de las votaciones que ya fueron tomadas.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas señaló que el señor Ministro Pardo Rebolledo tiene razón

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

pues solamente se eliminarían las consideraciones relacionadas con el bloque de constitucionalidad y lo relativo al control de convencionalidad.

Así, precisó que, de acuerdo con lo señalado en la sesión anterior, se eliminaría el apartado B del considerando décimo cuarto del proyecto, en tanto que trata el tema relativo a la integración de tratados internacionales que reconocen derechos humanos, y que en el apartado A se precisa que, desde el punto de vista formal, el Convenio 102 en cuestión sí satisface los requisitos para incorporarse al sistema jurídico mexicano, además de que México debe aplicar sus partes sustantivas entre las que se encuentra el artículo 26.3, del Convenio 102, por ubicarse dentro de la parte quinta, prestaciones de vejez, así como el artículo 67, inciso b), del mismo instrumento internacional, por hallarse en la parte Décima Primera, el cálculo de los pagos periódicos.

Señaló que, por otra parte, en el apartado C de este considerando, el cual pasaría a ser el apartado B, se precisa que la obligación de pago del impuesto en términos del dispositivo reclamado tiene naturaleza tributaria, la cual en modo alguno puede encontrarse sujeta al cumplimiento de las normas mínimas de seguridad social, siendo precisamente en este aspecto en el que radica la falta de razón de la quejosa recurrente, porque en todo caso dicha obligación no se encuentra sometida a los lineamientos adoptados en el Convenio 102, sino que se halla

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

esencialmente delimitada por los principios tributarios derivados del artículo 31, fracción IV de la Constitución.

En estos términos, indicó que en el proyecto se destaca que de ninguno de los preceptos del instrumento internacional que se estiman transgredidos, ni de ningún otro de lo que lo integran, deriva alguna norma en el sentido de que México no podrá gravar los ingresos por pensiones o jubilaciones que perciben sus residentes en el territorio nacional, ni puede derivarse interpretativamente que nuestro país hubiese renunciado a ejercer su potestad tributaria sobre ingresos de esa naturaleza o que la hubiese sujetado al cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad social, y particularmente a las que se cubrieran con los requisitos señalados en el artículo 67, inciso b), de los supuestos descritos en el diverso artículo 26.3, ambos del Convenio 102, precisando que, en todo caso, el compromiso asumido por nuestro país se circunscribe a respetar las normas mínimas para proceder a la suspensión o reducción de las prestaciones de vejez, de ahí que el cobro del tributo vía retención, en los casos en que resulte procedente, de ningún modo puede asumirse como una reducción de la pensión o jubilación respectiva. Por otra parte, indicó que en el proyecto se señala que no puede estimarse que México, al gravar las pensiones y jubilaciones, viole los artículos 26 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en cuanto establecen en el principio de derecho internacional *Pacta Sun Servanda* y la regla general de

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

interpretación de los tratados, porque a partir de la ratificación del Convenio 102, México ha cumplido con las disposiciones respectivas traduciéndolas en normatividad de derecho interno conforme a una interpretación contextual de su contenido, atendiendo a su objeto y fines, siendo muestra de ello los cobros que por concepto de pensiones y jubilaciones percibe la parte quejosa, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que al obtener los montos respectivos se le efectúe la retención correspondiente del impuesto sobre la renta, toda vez que el gravamen no equivale ni puede equipararse a una reducción de dichos conceptos, que es en todo caso a lo que el Estado mexicano se comprometió a realizarlo bajo determinadas circunstancias y requisitos.

Finalmente, señaló que en el proyecto se indica que el monto exento contenido en el precepto reclamado no implica que deba atribuírsele el carácter de regla prescrita para tener por cumplido el requisito previo del artículo 67, inciso b), del Convenio 102, y menos a la jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal en materia del mínimo vital, pues ni el precepto reclamado ni la jurisprudencia tienen el cometido de atender o desarrollar las normas mínimas de seguridad social contenidas en el Convenio 102, sin que por ello deban considerarse desatendidas las exigencias de este último, toda vez que su desarrollo y cumplimiento en el derecho interno mexicano habrá de realizarse en la normatividad

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

respectiva en materia de seguridad social, lo cual no fue impugnado en el presente juicio de garantías.

El señor Presidente Silva Meza precisó el alcance de la propuesta modificada del considerando décimo cuarto.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en el considerando décimo tercero, con independencia de las consideraciones relativas al bloque de constitucionalidad y al control de convencionalidad, existe un agravio en donde el quejoso reclama que los artículos 109, fracción III y 182, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violan el principio de equidad tributaria, al provocar un trato diferenciado injustificado entre los jubilados residentes en México y los residentes en el extranjero, sin que existan diferencias entre ambos tipos de contribuyentes.

Señaló que este argumento quedaría contestado conforme al proyecto, agregando que, incluso, en este apartado se atiende a una tesis de la Segunda Sala derivada del amparo en revisión 1174/2006, donde se señala que el Legislador cuenta con libertad de configuración legislativa para crear categorías de contribuyentes, concluyéndose que los argumentos analizados resultan infundados porque los residentes en el extranjero tienen particularidades propias que los distinguen de los residentes en el país, por lo que se estima que el trato diferenciado se encuentra justificado.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que las propuestas relativas a los considerandos décimo tercero y décimo cuarto se realizan en función a que se decidió suprimir los temas que se consideraron innecesarios de tratarse en el caso, al ser suficiente con otros argumentos que se contienen en el proyecto para dar contestación a los diversos planteamientos de la parte recurrente, precisando el alcance del considerando décimo tercero.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que si el agravio consiste en que el juez no hizo el análisis del planteamiento respectivo, lo primero que debe establecerse es si esto es fundado o no, indicando que la conclusión será diferente en uno y otro caso.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que el agravio del que se ocupa el considerando décimo tercero sí está relacionado con los tratados internacionales, toda vez que, en un primer momento, la recurrente expone que el a quo omitió analizar el argumento consistente en que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es contrario al artículo 133 de la Constitución Federal y al artículo 17.2 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, en tanto que, con motivo de dicho Convenio, los pensionados o jubilados por actividades en México, residentes en Canadá, reciben un tratamiento distinto que los pensionados o jubilados residentes en el

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

territorio nacional, pues la tasa máxima aplicable para los residentes en el extranjero es del 15% y para los mexicanos es del 30%, y, en un segundo momento, alega un problema de equidad en relación con el artículo 182 de la misma Ley.

Al respecto, precisó en cuanto al primer planteamiento que, al menos en la Segunda Sala, se ha sostenido que un control de convencionalidad a partir del artículo 17.2 del instrumento internacional referido implica un problema de legalidad, respecto del cual, en todo caso, tendría que dejarse jurisdicción al Tribunal Colegiado, de manera que si se decide que este Tribunal se haga cargo del planteamiento por economía procesal, habría que decirlo así, señalando que en el caso no existe violación al principio de equidad porque el trato diferenciado entre los residentes en Canadá y los residentes en el país, de acuerdo con diversos precedentes, se encuentra justificado. En cuanto al segundo planteamiento, señaló que puede contestarse con la misma razón que se dio cuando se analizaron las diferencias entre el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 32 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en el sentido de que ello no constituye un problema de constitucionalidad, dado que lo que se compara son dos preceptos de la misma jerarquía, debiendo, por tanto, declararse inoperante el concepto de violación respectivo.

Por lo que respecta al considerando catorce, indicó que el agravio relativo a que existe violación al artículo 133

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

constitucional, en relación con el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de Seguridad Social, se contesta en el sentido de que si bien México ratificó el citado convenio, el precepto impugnado no viola su artículo 67, dado que este precepto no dispone que las pensiones no puedan ser gravadas conforme a la legislación aplicable, ya que tal acción no implica una reducción de la pensión, sino el cumplimiento de la obligación constitucional de pagar impuestos, máxime que el Convenio referido presenta recomendaciones sobre el pago de las pensiones, sin determinar nada en absoluto en relación con el cobro de impuestos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que si por economía en el debate se ha considerado adecuado suprimir las consideraciones sobre el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad, dado que el problema puede resolverse sin hacer una remisión a ello, por la misma razón debe evitarse acudir al diverso extremo de establecer que los conflictos entre un tratado internacional y una ley constituyen problemas de legalidad, pues también esta cuestión da lugar a un debate innecesario, máxime que se han mencionado alternativas por las cuales puede atenderse al planteamiento del recurrente de forma directa y declararlo infundado.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que lo manifestado por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

está puesto en razón, señalando que en esta parte del proyecto sólo votará en contra de las consideraciones.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas consideró que en el proyecto existen argumentos suficientes para dar una respuesta directa a los planteamientos sin introducir la discusión sobre si el conflicto entre una ley y un tratado implica una cuestión de constitucionalidad y de legalidad.

Sometida a votación la propuesta modificada de los considerandos décimo tercero y décimo cuarto del proyecto, consistentes en determinar, respectivamente, que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el artículo 133 constitucional, en relación con el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, y que dicha disposición impugnada no viola el artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con el Convenio 102 relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos, se aprobó por unanimidad de once votos. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos y Pardo Rebolledo, respecto del considerando décimo tercero, votaron en contra de las consideraciones, y los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Morales y Valls Hernández, con reservas para, en su caso, formular voto concurrente.

Sometida a votación la propuesta del considerando décimo quinto del proyecto, consistente en determinar que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el artículo 123, apartado A, fracciones VI, VIII y XXIX, y apartado B, fracciones VI y XI, de la Constitución Federal, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando décimo sexto, en el que se analizan los agravios en que se aduce que el precepto reclamado viola el artículo 5º constitucional.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en su proyecto se propone declarar infundado el argumento de la quejosa recurrente en el sentido de que la retención del impuesto sobre la renta, en términos del dispositivo legal reclamado, constituye un acto privativo del producto de su trabajo, al considerarse que del enlace interpretativo de los artículos 5º y 31, fracción IV, de la Constitución General se advierte que la obligación de pagar impuestos de ninguna forma implica que a persona alguna se le prive del producto de su trabajo, sino el establecimiento de un vínculo jurídico directamente relacionado con la facultad de que se haya investido el Estado para obtener recursos que le permitan realizar sus

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

finés, y la correlativa obligación de los sujetos pasivos de sufragar esas actividades públicas, con lo que se concluye que la retención del impuesto sobre la renta realizada a los pensionados y jubilados en términos del precepto reclamado, de modo alguno puede considerarse como una privación del producto de su trabajo, pues constituye una cantidad que en su calidad de contribuyentes aportan al erario para cumplir con su obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Sometida a votación la propuesta del considerando décimo sexto del proyecto, consistente en declarar infundados los agravios en que se aduce que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el artículo 5º constitucional, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando décimo séptimo, en cuanto se analizan los agravios en que se aduce que el precepto reclamado viola el artículo 25 constitucional.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso que en su proyecto, previas consideraciones para justificar el estudio de fondo a partir del principio de rectoría económica del Estado en el desarrollo nacional, se propone declarar infundados los argumentos relativos, en razón de que la rectoría aludida no se ve menoscabada por las leyes que contienen contribuciones,

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

pues si bien esas normas implican una obligación económica para los contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público para que a su vez el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra fundamento en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

En este sentido, señaló que en su proyecto se precisa que el tributo en cuestión, a través del excedente al monto exento, contribuye precisamente a sufragar los gastos públicos, con lo que permite al Estado salvaguardar el principio de rectoría económica a través de la implementación de diversas acciones, entre las que se encuentra la de alentar la producción, conceder subsidios, otorgar facilidades a empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, conceder facilidades para la importación de materias primas y organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, por lo que se estima que lejos de actualizarse una afectación a dicho principio se fomenta su consecución.

El señor Ministro Aguirre Anguiano estimó que el agravio de la recurrente constituye una afirmación sin contenido dado que no expone en qué estriba la desatención a las obligaciones del Estado en fomentar el crecimiento económico y el empleo ni explica de qué forma se disgrega la responsabilidad del Estado de mantener una justa distribución del ingreso y la riqueza ni indica por qué la retención regulada constituye un elemento más para el debilitamiento del mercado interno. Después de exponer la

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

forma en la que se responde dicha argumentación, señaló que ésta no concreta un agravio ni una clara causa de pedir, pues está constituida por afirmaciones escuetas, y que si se le da respuesta, ésta debería corresponder a la tesis del Pleno que establece que del artículo 25 de la Constitución Federal no se siguen derechos humanos que puedan ser aducidos por un particular en razón a que los cómo relacionados al desarrollo de la rectoría económica del Estado, siempre dependerán de un punto de vista particular sobre la forma en que debe cumplirse esta tarea.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que ni el concepto de violación ni el agravio efectúan un planteamiento concreto en relación con la violación al artículo 25 de la Constitución Federal, pues si bien lo menciona, en realidad no existe una argumentación. Estimó que, quizá, el estudio respectivo partió de la idea de que operaba la suplencia de la deficiencia de la queja, lo que se revela del conjunto de argumentaciones amplias que derivan de la tendencia que imperaba en el proyecto original. En este sentido, señaló que el concepto de violación y el agravio mismo son deficientes, indicando que podría considerarse que éste es inoperante en tanto que es ligeramente más amplio que el concepto de violación, al introducir una cuestión novedosa que no estudió el Juez de Distrito. De esta forma, precisó que si bien resulta interesante determinar los alcances del artículo 25 constitucional, lo cierto es que los planteamientos de la demanda y del recurso no son

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

suficientes para motivar la respuesta que da el proyecto y deben declararse inoperantes.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que preferiría establecer en el proyecto que no existe causa de pedir y que, por tanto, deben declararse inoperantes los agravios, en lugar de entrar al estudio de fondo, cuyas consideraciones pudiera compartir en otro momento.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que sí existe un argumento que cede en mucho la causa de pedir, en el sentido de que con la aplicación del precepto combatido se disgrega la responsabilidad del Estado de mantener una justa distribución del ingreso y la riqueza y que la retención de referencia constituye un elemento más para el debilitamiento del mercado interno, pues se limita la capacidad económica de personas que por justicia social y gracias a ahorros se han hecho acreedores de una pensión o jubilación, estimando que, por tanto, debe darse respuesta a éste planteamiento, aunque esté de acuerdo en declararlo infundado, pero no con fundamento en los criterios del Pleno y de la Segunda Sala que se transcriben, en cuanto señalan que del capítulo económico de la Constitución Federal no pueden generarse derechos fundamentales, pues una afirmación categórica como ésta se compadece poco con la dinámica del constitucionalismo moderno. De esta forma, señaló que, en su caso, reservaría su derecho para formular voto concurrente.

Sesión Pública Núm. 119 Lunes 12 de noviembre de 2012

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando décimo séptimo del proyecto, consistente en declarar inoperantes los agravios en que se aduce que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el artículo 25 constitucional, se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y porque se declaren infundados los planteamientos relativos, en tanto son suficientes para entrar a su análisis, reservando su derecho para formular voto particular.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Silva Meza, el secretario general de acuerdos dio lectura a la propuesta de puntos resolutivos, la cual se aprobó por unanimidad de once votos en los siguientes términos:

“PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en relación con los actos de aplicación del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, atribuidos al Director General y al Director de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.